

Trabajo, poder y revolución en Bolivia

Javier Villanueva
*Comité PorBolivia- México,D.F**

1. En primer lugar hay que hablar de revolución; respecto a Bolivia desde luego, pero ¿no también, *entonces*, respecto a casi cualquier protesta, resistencia y rebeldía popular? Estamos muy lejos de vivir una situación revolucionaria global; en los últimos diez años la resistencia de los pueblos y de las clases explotadas y oprimidas ha avanzado unos pasos en su generalización y entrado en una etapa de desarrollo cualitativamente distinta, pero sigue viviendo una situación general de resistencia y, muy posiblemente, de carácter prolongado. Incluso en Bolivia, a primera vista –y con vista cansada– pareciera que no se puede hablar de que la revolución tenga la más mínima posibilidad de triunfar, salvo reduciéndola a la aspiración de instaurar un régimen político que lime las aristas más ofensivas del neoliberalismo, que le dé “un rostro más humano”, menos “salvaje”. No obstante, así como toda ofensiva incluye movimientos de resistencia, así también toda resistencia incluye movimientos a la ofensiva, los que, además de abrir espacios para reagrupar fuerzas, alumbran el rumbo y los nuevos pasos a dar. Cada movimiento, aun tratándose del repliegue más desordenado, sólo encuentra su sentido y puede conducirse en consecuencia en términos de su relación con todos los demás –pasados, presentes y futuros– en una perspectiva de mayor alcance. Y entonces salen a la luz otras posibilidades para hacer triunfar una revolución incluso ahí donde parecía imposible.

La insurrección en Bolivia ha vuelto a proyectar sobre el terreno, renovada, una perspectiva estratégica ineludible para los movimientos sociales: que la liberación de los pueblos y de las clases populares –desde sus fronteras, pero cada vez desbordándolas más claramente– pasa por la revolución, que es en este sentido en el que apuntan los desenlaces de sus múltiples luchas parciales, que hacia ella convergen y que para ella habrán de unirse sus diferentes contingentes, y también que será en torno a su capacidad para hacerla triunfar que se jugará la verdad de sus promesas y su destino. Es una perspectiva que aclara el camino, orienta los pasos, aclara el lugar de las diferentes fuerzas y las relaciones entre ellas, y que demanda, exige, el cumplimiento de numerosas y difíciles tareas con mucho tiempo de antelación. Es, pues, una parte decisiva del trabajo que hay que *poder hacer en contra* de los magnates que dominan países y vastas redes trasnacionales y que se disputan el mundo. Éste es el sentido por el que quema las manos la pregunta sobre el qué hacer.

La cuestión ha sido planteada de nuevo por el desarrollo mismo de la resistencia popular, en especial por su sector más urgido de un cambio; en este caso, por aquellos trabajadores aymaras del campo y de la ciudad cuya carta de presentación –escrita sobre la piel de su rostro, con nuevas heridas surcando viejas cicatrices– es el haber hecho de su extrema marginación una condición para sobrevivir a uno de los saqueos y exterminios más largos y brutales del planeta. Gracias a ellos, hoy tenemos más claro qué hacer, cómo hemos de prepararnos en la resistencia para abrir un nuevo porvenir entre todos y para todos. Nos han mostrado al desnudo, y no como una estructura estampada sino como una historia viva, la nuestra, los vínculos elementales entre los principales componentes de la vida social: el trabajo, el conflicto, el poder y la revolución.

2. Al actuar sobre el curso de los acontecimientos, así sea con una voz “desde lejos”, pero *nunca* desde fuera, nos vemos obligados a distinguir entre la revolución y la insurrección. Ambas cosas se refieren a lo mismo, y hasta se puede definir la una en términos de la otra, pero su horizonte temporal es distinto: la insurrección es la revolución concentrada, la revolución es la insurrección desplegada. En ambos casos, en efecto, como dice una definición clásica, se trata de “la irrupción de las masas para tomar las riendas de su destino”, lo que supone, se entiende, dos cosas: primero, que existe algo a lo que se llama “riendas del destino de las masas” y, segundo, que estas “riendas” están tomadas por ciertas élites a las que “las masas” tienen que arrancárselas. Supone, pues, dos cosas: el trabajo –es decir, el uso de la fuerza de trabajo para satisfacer ciertas necesidades y no tales otras–, lo que sin lugar a dudas es la condición básica de cualquier destino, y el poder –es decir, la capacidad efectiva de una parte de la sociedad para subordinar la actividad de todos al servicio de sus propios proyectos.

Sin embargo, la “irrupción de las masas” –de “las clases subalternas”, de “la multitud”– se viene dando una y otra vez, en distintos lugares y de diferentes formas, desde hace, digamos, unos catorce años, constituyendo lo que perfectamente puede y debe considerarse *un* movimiento mundial, el movimiento contra el neoliberalismo. Hablamos de las movilizaciones contra la guerra de Estados Unidos en Irak, los levantamientos indígenas en Ecuador, Chiapas, Perú y Bolivia, las duras y largas resistencias en Palestina y Cuba, las huelgas obreras en Francia, Italia y España y las estudiantiles y magisteriales en numerosos países, las acciones de los sin tierra en Brasil y los sin trabajo en Argentina, de los sin papeles en Europa y los sin techo por doquier, las concentraciones internacionales en los intergalácticos, en Seattle y en Sao Paulo. Todas estas movilizaciones representan a muchísimas otras “irrupciones de las masas” que, con su enorme diversidad y pese a sus

numerosas contradicciones, quedan unificadas por el hecho de rebelarse contra un mismo destino: el no tener más razón de ser que la de servir al puñado de financieros que ponen las condiciones para el uso de la fuerza de trabajo en todas partes.

¿No son todas estas movilizaciones, de un modo o de otro, “irrupciones de las masas para tomar las riendas de su destino” y, en cierto sentido, una sola “irrupción de las masas” a escala mundial en esa dirección? ¿Qué hay entonces de especial en “la irrupción de las masas” boliviana que justifica hablar de ella como insurrección y como revolución? O, si se quiere mantener un sano escepticismo, ¿qué es lo que nos lleva a por lo menos considerar tales términos para discutir su desarrollo y sus alternativas? La metáfora “tomar las riendas de su destino” sigue siendo enteramente válida; sólo que, ahí donde la resistencia global da lugar a un movimiento insurreccional, las nuevas exigencias de la práctica nos obligan a afilar los términos. Y hay buenas razones para pensar que el paso de la resistencia a la insurrección es justamente el porvenir que toda resistencia está forjando. Tenemos, pues, que aprender de Bolivia y con Bolivia, no importa si es desde lejos, porque en lo esencial –la estructuración mundial del trabajo y de la lucha– no estamos fuera de ella.

“La cuestión decisiva de toda revolución es la cuestión del poder”

3. La insurrección popular boliviana alcanzó conquistas importantes el 17 de octubre de 2003. Derrocó al gobierno que encarnaba a los sucesivos gobiernos neoliberales de las últimas décadas; suspendió un proyecto de las trasnacionales para saquear el gas boliviano –los derechos de exploración, explotación y comercialización siguen en manos de esos consorcios– y reabrió la discusión sobre quién ha de decidir que se hará con los recursos naturales –o mejor, quién decidirá el trabajo de extraerlos y elaborarlos, qué necesidades habrá de satisfacer y cuáles sacrificar–; e hizo que el nuevo gobierno aceptara la realización de un congreso constituyente para redefinir “la unidad del país”, las grandes líneas de las relaciones entre sus habitantes, en particular respecto a las naciones originarias –aunque el nuevo gobierno, de hecho un vicegobierno, se arrogó la responsabilidad de convocar y conducir el tal congreso, lo que es dura y legítimamente cuestionado por la organización aymara–. Todo esto supone, además, una reivindicación del poder soberano de la organización y movilización popular para decidir la destitución de gobernantes, la cancelación de políticas públicas y la renovación del orden constitucional.

¿Qué tan decisivo es lo logrado, qué tanto lo que falta por lograr, para resolver las contradicciones

que estallaron con la insurrección, para iniciar un nuevo ciclo en la vida del país? En otras palabras, ¿qué es lo que define el triunfo de esta insurrección? O lo que viene a ser lo mismo, ¿cómo se define la revolución a partir de la acción de los insurgentes?

Sin duda, *despunta* otra república: una república democrática y popular, una nación soberana de múltiples naciones y marcadamente indígena. La insurrección se presenta como el concentrado de una revolución popular, indígena, nacionalista y democrática. Estos conceptos, pese a su evidente desgaste y corrupción en muchos medios, siguen siendo necesarios para captar las principales contradicciones que estallaron con la insurrección, el sentido en que tratan de resolverlas los insurgentes y las grandes alianzas y antagonismos a que dieron lugar. En la medida en que las conquistas concretas del movimiento se impongan a todos como condiciones suficientemente duraderas como para dar inicio a un nuevo ciclo de desarrollo realmente democrático, indígena y popular de “la nación boliviana”, sólo en esta medida podrá decirse que los insurgentes lograron llevar su insurrección hasta hacer triunfar la revolución que están alumbrando con sus propias manos y para la que sacrificaron numerosas vidas. Y todos sabemos muy bien –aunque algunos lo olvidan una y otra vez– que la caída de un gobierno no consigue establecer ninguna condición general duradera, y que los demás puntos sólo son, por lo pronto, promesas, discusiones abiertas y objeto de encuestas de opinión.

4a. El desenlace no se ha definido, la revolución aún no ha triunfado. Lo dice fuerte el sector más masivo, indígena y popular de los propios insurgentes: decidimos hacer “un repliegue táctico”, “nos siguen acosando, esto no ha terminado”, “les damos un tiempito, no’ más”. El repliegue es uno de los movimientos más difíciles y riesgosos. Al gobernar así su insurrección (refutando, de paso, a quienes juzgan que están dominados por la desesperación), los insurgentes pasaron una de las pruebas más duras a su capacidad para tomar las riendas de su propio destino. Aún tendrán que pasar muchas más.

El primer triunfo no sólo no cayó en sus manos, sino que este sector de los insurgentes se vio obligado a replegarse ante la insuficiencia provisional de su fuerza para sobreponerse a las fuerzas que se oponen a su ascenso. Celebró justificadamente –aunque no sin externar sus reservas– el haber tirado al gobierno, condición que logró *imponer* en un momento determinado; pero al mismo tiempo sabe que *le fueron impuestas* condiciones para la sustitución del gobierno y para decidir sobre sus reivindicaciones, relegadas a un futuro indeterminado; no le queda más alternativa que tratar de convertir estas condiciones en provisionales: “esto no ha terminado”.

En efecto, este sector de los insurgentes le puso un plazo de 90 días al vicegobierno y amenazó con

volver a “estrangular” las ciudades si para entonces no daba muestras claras de ser “un gobierno nacionalista”. En otras palabras, no es gente que esté dispuesta a esperar hasta la realización y las resoluciones de la “asamblea constituyente”. Tal vez tres meses no sean suficientes para que esa asamblea se realice, pero sí lo son, y de sobra, para que el vicegobierno dé muestras claras de lo que se propone hacer de ella con el poder que cayó en sus manos para convocarla, y, en general, de lo que se propone hacer con las demás reivindicaciones de la insurrección, empezando por la de los hidrocarburos: ¿quién decidirá el trabajo de aprovecharlos, en beneficio de quién?, ¿qué puede estar motivando que el vicegobierno no se manifieste al respecto y le dé largas al asunto?, ¿qué es lo que con ello está mostrando a las claras? Lo que se está poniendo a prueba con el plazo fijado, pues, es si se puede pasar de las conquistas alcanzadas a nuevas conquistas que representen ya condiciones duraderas para un nuevo desarrollo de la vida en el país. Este sector de los insurgentes no se hace ilusiones respecto a lo alcanzado y sabe muy bien que, si es muy difícil organizar un repliegue ordenado, más difícil es decidir una nueva ofensiva general, como la de octubre, la que ahora tendría que contar con una fuerza mucho mayor. Tal es la nueva prueba que se ha comprometido a pasar. Ponerle un plazo a otro es también fijárselo a sí mismo. Si no lo hace cumplir, si no cumple con él, quedará mal parado, pero fijarlo fue importante, tal vez necesario, para organizar el repliegue.

4b. Otro importante sector que se incorporó a la insurrección, el que se identifica como “sociedad civil”, para incluir a los empleados y empresarios agraviados por el neoliberalismo y que no se reconocen como “pueblo”, cuya presencia se hizo más notable en las tribunas y medios nacionales e internacionales que en los caminos y calles, aunque también se sumó a las marchas y huelgas, muestra tener mayores ilusiones en lo alcanzado y mayor desconfianza en las implicaciones que puede acarrear el tratar de luchar directamente por conquistas más sólidas; o lo que viene a ser lo mismo, desconfía de la capacidad del otro sector para conducir la lucha “racionalmente”, “sin desesperación”. Prefiere encuadrar las fuerzas en los cauces institucionales y reformarlos mediante, primero, la asamblea constituyente, “a la que ya se comprometió el presidente Carlos Mesa”; segundo, mediante las elecciones municipales de diciembre de 2004, para las que confía contar ya con “la primera fuerza política del país”, que tiene un 39 por ciento de las preferencias electorales, aunque advierte: “ojo, esto no es suficiente”; y tercero, mediante “la internacionalización del proceso”, refiriéndose explícitamente a la rápida disposición, “en 10 minutos”, de los enviados especiales de los presidentes de Brasil y Argentina (donde, dice, “se viven procesos similares” al nuestro) para reunirse con las

directivas de los movimientos populares bolivianos.

Es otra forma de decir que la revolución aún no ha triunfado y otra forma, más aterciopelada, de pretender afianzar sus reivindicaciones, aunque jerarquizadas en otro orden: la internacionalización del proceso “es uno de los pies para enfrentar la injerencia de Estados Unidos”; “el otro pie es la acción parlamentaria. Y lo fundamental es mantener nuestra presencia en las calles y carreteras”. No quiere romper con el sector más indígena, popular y masivo, así sólo sea porque lo necesita (aunque no hay que reducirlo a una razón instrumental); al mismo tiempo, sin embargo, no ve más que desesperación en su radicalismo, un riesgo tanto de acciones aventureras que faciliten la injerencia de Estados Unidos como de posiciones excluyentes que den al traste con la conquista de un gobierno y una mayoría parlamentaria no entreguistas y oligárquicos.¹

5. La detención de la revolución justo al llegar frente a una cuestión decisiva para definir su triunfo o derrota, causada en parte por la falta de unidad entre los dos sectores anteriores, no puede menos que dar lugar a la exacerbación, al menos provisional y en buena medida artificial, de sus contradicciones. No hay que subestimar su rivalidad: así es como los problemas a resolver afloran explícitamente y pueden ser asumidos y trabajados por todos para superarlos o, por lo menos, para disciplinar democráticamente las divergencias a que dan lugar. En particular, estas contradicciones han encontrado una voz para expresarse en el Movimiento Indígena Pachakutik por un lado y en la parte más “sociedad civil”, menos “pueblo”, del Movimiento al Socialismo (MAS) por el otro.² La sola presencia de un amplio sector de los insurgentes que se inclina hacia un lado o hacia el otro pero mantiene su distancia respecto a ambos muestra que ahí hay un problema de su movimiento común que es el que hace falta resolver y que es el que se está tratando de resolver.

Ante el plazo de 90 días dado por el Pachakutik al vicegobierno para que realice “algún tipo de cambio” de “las leyes neoliberales e imperialistas vigentes”, bajo la amenaza de “estrangular la ciudad”, contando con que “otras ciudades también se levantarán, como lo hicieron en octubre y septiembre”, los “sociedad-civil” del MAS responden: “Nosotros no hablamos de plazos”, eso es exigir

¹ Los entrecomillados de este inciso corresponden a Oswaldo *Chato* Peredo (“El MAS debe prepararse para gobernar Bolivia”, entrevista de Blanche Petrich con el dirigente del Movimiento al Socialismo, *La Jornada*, 31 de octubre de 2003). Aunque Evo Morales pertenece al mismo partido, su posición no puede identificarse sin más con la de Peredo. Como dirigente de la lucha cocalera y de origen aymara, tiene que ser considerado aparte y, en los hechos, aunque muy bien puede ser “funcional” al aparato del MAS, ha ocupado una posición diferente. Por desgracia, aquí no podemos detenernos a discutir en detalle las relaciones entre los sectores sociales, las organizaciones, los grupos y los dirigentes.

² Hasta ahora, la identificación entre Felipe Quispe y el Pachakutik es casi absoluta, no así entre Evo Morales y el MAS, como advertí en la nota anterior. Es Peredo quien aparece representando las voces que se polarizan frente al Pachakutik.

“más de lo que es posible lograr en este momento”, una muestra de “desesperación”. En otras palabras, le dicen al Pachakutik: no cuenten con nosotros para eso, lo que muy bien puede ser escuchado por el vicegobierno como si le estuvieran diciendo al oído: en principio, cuente Ud. con nosotros para hacer fracasar ese plazo. Se mantienen las contradicciones entre el vicegobierno y esa “sociedad civil”, seguirán midiendo fuerzas en medio de tensiones más y menos fuertes, pero “la actitud” de la segunda ya es otra, poniendo de manifiesto –entre otras cosas– un proceso de realineamiento de las convergencias y divergencias *a escala social* que hay que asumir y tratar de modificar a la vez. El viraje de esta parte del MAS sólo tiene importancia en la medida en que exprese una nueva tendencia en el movimiento de aquella “sociedad civil” a la que se remite y en la medida en que la posición de este sector social importe para el curso futuro de los acontecimientos, sobre todo por su influencia actual –sin duda recíproca– sobre los cocaleros, los trabajadores urbanos y los estudiantes y vecinos. Por lo demás, ni los aymaras ni el Pachakutik pueden decir que no sabían con quién se estaban aliando, ni que no buscaron su alianza, ni cuáles serían las consecuencias que sobre ese aliado tendría el repliegue táctico que ellos decidieron por su cuenta. Y también saben que las alianzas no son hasta que la muerte nos separe. Pero no sucede lo mismo con el sector popular representado en el MAS: ahí sí, la hermandad social e histórica es hasta siempre.

En cuanto a la asamblea constituyente, los representantes de “la sociedad civil” en el MAS –no así los más vinculados al “pueblo”– se inclinan a dejarla porfiadamente en manos del vicepresidente ascendido y, refiriéndose a la relación entre los distintos sectores populares, confía en que esa asamblea “va a garantizar que durante un buen trecho tengamos que caminar juntos”. Aquí sí, cuenten con nosotros y contamos con ustedes. Sin embargo, tal vez se refieren al sector popular del MAS, porque el Pachakutik ha dicho que la asamblea constituyente “no es nuestro plan”; “no estamos por refundar Bolivia, vamos a replantear la reconstitución del Qullasuyo y autodeterminarnos como nación indígena en la república del Qullasuyo”, no a “ponerle unos parches” a Bolivia. En lugar de que el MAS responda, por ejemplo, con un compromiso a favor de las autonomías indígenas, responde diciendo del Pachakutik: “es un movimiento... no quiero decir racista, pero sí excluyente”. Y el Pachakutik, en lugar de retar al MAS a comprometerse oficialmente, por ejemplo, con una asamblea constituyente autónoma respecto al vicegobierno y de entrada contrapuesta al neoliberalismo, replica: “el MAS es reaccionario”. ¿Por qué, entonces, se aliaron en los meses pasados? Al contradecir al otro se contradicen a sí mismos, es decir, la contradicción no es una cuña ardiente que está metida entre ellos sino que son ellos los que están metidos en una contradicción de su movimiento común, cada

uno la lleva dentro de sí. Lo que resta por ver es hasta cuándo es que su movimiento podrá seguir siendo común, a partir de qué momento es que podrá seguir su camino aun sin el acuerdo de una de sus partes, pero a pesar de ello fortalecido.³

6. Poniendo los exabruptos y demás condimentos en su lugar, viendo las cosas en conjunto, lo anterior no representa sólo, ni tanto, la fotografía de una revolución que en un momento crucial tiende a desgarrarse internamente al no encontrar por dónde y cómo proseguir su camino, sino también y sobre todo la imagen de los distintos trabajos que el movimiento todo está llevando a cabo para reunificarse lo más posible en torno a una solución a la disyuntiva frente a la que se encuentra, explorando, poniendo a prueba y criticando implacable y rudamente sus alternativas.

Los intentos de conciliar o mediar entre las posiciones extremas juegan un papel muy limitado y dudoso. En efecto, se está ante un problema que sólo puede resolverse entre todos y para todos, y, al menos en principio, hay que suponer que casi todos están tratando de resolverlo en ese sentido. No obstante, cada uno lo enfrenta desde su posición particular y con los medios a su alcance. Además, cualquier alternativa, hasta la que represente la mejor de las soluciones efectivas, resulta incierta en sus consecuencias e implica beneficios y sacrificios diferenciales. Y no sólo eso; habrá que tomar una decisión antes de que aparezca una propuesta que sea ampliamente reconocida como la mejor, y cualquier decisión creará una situación irreversible para todos. Seguro que están de acuerdo en tomar la decisión democráticamente, pero la definición misma de lo que es democrático en concreto forma parte del problema a resolver. Por lo demás, la democracia es una forma de poder; luchar por la democracia es luchar por una forma de poder. La cuestión del poder frente al campo neoliberal, pues, viene acompañada de la cuestión del poder entre los propios sectores que se oponen a él. Resolver la una exige resolver la otra.

7. Como quiera que sea, las consecuencias de la insurrección serán permanentes, incluso en el peor de los casos, pero aún no sus actuales conquistas, incluso en el mejor. Es a lo que se refieren tanto aquel “nos siguen acosando, esto no ha terminado” como ese otro “ojo, esto no es suficiente”. Sólo que el cambio de gobierno dice muy poco, y lo que dice es muy engañoso, sobre cuál es la condición para hacer que la revolución triunfe.

³ Los entrecomillados relativos al Pachakutik corresponden a Felipe Quispe (“En Bolivia sólo hubo cambio de personas”, entrevista de Ximena Ortúzar, *La Jornada*, 26 de octubre de 2003). Los relativos al MAS son de O. Peredo (citado en el inciso anterior).

Cuando se ha dicho “la cuestión decisiva de toda revolución es la cuestión del poder”, no se decía que la cuestión del poder fuera tan poca cosa como cambiar a quien ocupa tal o cual puesto; exige establecer una nueva situación más general y duradera de correlación de fuerzas entre los sectores que constituyen la sociedad en cuestión; o para ser más directos, consiste en decidir cuál será *el sector* que logre establecer las alianzas que le permitan imponer *de forma duradera* las nuevas condiciones generales bajo las cuales se desarrollará la vida social –incluida, por supuesto, la elección de los responsables de administrarlas, pero no hay que irse por las ramas–. El repliegue táctico dice una sola cosa: una parte de los insurgentes se prepara con vistas a las nuevas batallas que decidirán la cuestión del poder, convencidos de que la decisión dependerá, ante todo, de la organización y movilización popular, aún insuficiente, porque de lo que se trata es de tomar las riendas de su destino, es decir, arrancárselas a quienes las tienen. La otra parte cree que “se prepara para gobernar” y que, para ello, no es suficiente el 39% de los votos; ojo, lo que no es suficiente es ganar las elecciones para administrar un poder que aún lo detenta –sin haber sido tocado seriamente, ni mucho menos– el mismo sector social que viene saqueando todo lo que tiene a su alcance; que esto no es suficiente lo pueden atestiguar muy bien muchos gobiernos (¿no se lo dijeron aquellos enviados especiales?).

El problema con la llamada “izquierda tradicional” (lo que suele hacer referencia a sólo *una* de las tradiciones de la izquierda, la dominante desde mediados de los 70) no es que haya luchado por tomar el poder; al contrario, su problema es que renunció a la lucha por el poder popular a cambio de escalar posiciones para administrar el poder establecido, el de los señores del dinero, convirtiéndose en un juguete en sus manos conforme la gran mayoría de los votantes, o de los insurgentes, dejaron las calles y las asambleas para regresar a sus casas, al trabajo asalariado y a las relaciones mercantiles. La alternativa no es, y no lo ha sido nunca, más que de forma marginal, la de oponer la vía armada a la vía parlamentaria:⁴ la vía armada muy bien puede ser, y lo ha sido en muchas ocasiones, otra forma de disputar posiciones administrativas del mismo poder establecido. La verdadera alternativa radica, y ha radicado invariablemente ahí desde hace, por lo menos, siglo y medio (los Talleres Nacionales, la Comuna de París, la Convención de Aguascalientes, los soviets, la COB, ...), en eso que ha reafirmado la nueva insurrección boliviana: la organización y movilización popular sostenida y unificada desde sus centros de trabajo, barrios, aldeas y comunidades para decidir y hacer valer políticamente sus reivindicaciones, sus alianzas y antagonismos, sus pasos y sus plazos, en contra de quienes vienen

⁴ Leyendo a algunos críticos de “lo que hay de común en las izquierdas tradicionales”, pareciera que Lenin, Rosa Luxemburgo y Pannekoek eran unos guerrilleros que se oponían al parlamentarismo de Kautsky y compañía.

determinando las condiciones generales y particulares para el uso de la fuerza de trabajo de toda la sociedad.

En Bolivia, pues, la revolución todavía está en juego, primero, porque las fuerzas del neoliberalismo asentadas en el país –y no todas de origen externo, ni mucho menos– distan mucho de haber sido desorganizadas; han tenido que dar un pequeño paso atrás, pero no será su debilidad la que pueda impedirles emprender una contraofensiva para recuperar terreno. Y segundo, porque las diferentes fuerzas insurgentes aún no han logrado unificar su organización y movilización al grado necesario para señalar concretamente las conquistas que definan de forma inequívoca el sentido de su insurrección, el nuevo rumbo a darle al país, ya no digamos para imponérselas a los neoliberales. El poder establecido fue desafiado, pero tanto aquel poder como este desafío siguen en pie.

El poder constituyente es siempre un poder constituido

8a. Lo anterior nos lleva a ver del siguiente modo la disyuntiva frente a la cual está detenida la revolución. Uno de los posibles caminos a seguir, abierto como la continuación *natural* de las luchas que culminaron el 17 de octubre, es enfilarse en la siguiente dirección:

1) Hacer efectiva la realización de una asamblea constituyente nacional, porque el supuesto “compromiso” del vicegobierno ni es auténtico ni garantiza nada.

2) Constituir la de entrada como una asamblea popular, es decir, hacer valer en ella el peso específico, la presencia, las prioridades y los procedimientos deliberativos y resolutivos propios de los sectores populares, *su* democracia, tal como se ha venido desarrollando en la relación entre las comunidades indígenas y las organizaciones de los trabajadores del campo, la mina y la ciudad.

Y 3) ganar en ella sus reivindicaciones, para lo que, además de la presencia y los procedimientos característicos del pueblo, pero con base en ellos, se requerirá mucha habilidad política para conducir las relaciones en la propia asamblea, en el país y a nivel internacional.

En suma, el camino *natural* es luchar por hacer valer una asamblea popular constituyente de una nueva nación, en la que se establezca de forma permanente el reconocimiento a los derechos y la cultura de las naciones originarias, incluida su autonomía, y la propiedad nacional inalienable sobre los hidrocarburos.

Pero lo cierto es que la resultante del 17 de octubre, la que hoy por hoy *constituye en principio a ese constituyente*, consiste en que los sectores populares no tuvieron –*hasta entonces*– la fuerza

suficiente ni para garantizar la realización de la tal asamblea ni para ganar las otras reivindicaciones que ahora tendrían que defender en ella, ni siquiera para unificarse en torno a estas cuestiones o, de perdida, para exigirle al vicegobierno algo de por sí tan condescendiente como que en sus primeros meses se defina claramente, con hechos, respecto a las reivindicaciones centrales de la insurrección que dio origen a su nombramiento. En estas condiciones, entonces, limitarse a seguir ese camino “constituyente”, por más que se complemente con la elección de candidatos municipales y la recepción a enviados especialísimos de los gobiernos amigos, es tanto como enfilarse a una vice-asamblea vice-constituyente, llamar a los insurgentes a que se dejen trasquilar.

Antes que llamar a la asamblea constituyente, si no se quiere quedar como un simple eco del vicepresidente ascendido, habría que decir cómo se va a remontar el repliegue iniciado aquel 17 de octubre y superar la insuficiencia de fuerzas que lo determinó; no hacerlo es entregarse a la inercia y condenarse a no constituir nada más que, cuando mucho, lo que ya está constituido, es decir, la insuficiencia de las fuerzas populares y su repliegue, favoreciendo su debilitamiento y dispersión. ¿O piensan acaso que esto se subsanará preparando discursos, iniciativas de ley y campañas electorales? Esto sería lo que, según una definición clásica, se llama cretinismo parlamentario; y tras una insurrección como la vivida, esto no sería sólo una muestra de la deformación profesional que suele hacer presa de abogados, diputados y académicos, sino también, ya, un síntoma de autismo.

8b. Por otra parte, no se puede dejar de luchar con los medios al alcance por una asamblea realmente constituyente de la nueva nación democrática, popular, indígena y nacionalista que entrañaba la insurrección, y no meramente por un foro de discusión para acordar una plataforma política para la lucha futura. ¿Quién luchó y vio caer a los suyos, para luego encerrarse a discutir por qué luchaban, dejando que las cosas entre tanto sigan igual que antes? Además, tal como hemos visto que están las cosas al interior del movimiento, lo más seguro es que, pese a la enorme y profunda solidaridad manifestada por los sectores populares y a su clara disposición por ser incluyentes, la realización de ese foro, si no es que la decisión misma de llamarlo, haría saltar las contradicciones entre los dos sectores sociales que hasta aquí venían golpeando juntos pero marchando separados.

En otras palabras, dejar de luchar por la realización de *esa* asamblea popular constituyente de *esa* nueva nación sería llevar el repliegue táctico demasiado lejos, dejarle las manos libres al campo neoliberal y abandonar el terreno de la lucha revolucionaria que habían logrado abrir para concentrarse de nuevo en la lucha reivindicativa y opositora por un periodo indeterminado –no como si nada

hubiera pasado, pero sí como si nada se hubiera conquistado realmente, con la consiguiente pérdida, temporal pero siempre grave, en la moral de lucha. Sería, pues, otra vía para llegar igualmente al debilitamiento y dispersión de las fuerzas insurgentes.

Es la misma inercia de la situación constituida como resultante del 17 de octubre, asumida tal vez con optimismo en la primera alternativa y con pesimismo en la segunda, la que en uno u otro caso estaría llevando a la posposición indefinida de la revolución tras el primer triunfo de la insurrección. No se trata, entonces, de escoger el mal menor, sino de combatir aquella inercia. La pregunta que sigue esperando una respuesta con esta segunda alternativa es, pues, la misma que eluden los que proponen ir a la constituyente de la mano del vicepresidente ascendido: cómo se va a remontar aquel repliegue y superar la insuficiencia de fuerzas que lo determinó.

9. A como están las cosas, ¿cuál es el sector social que tiene en sus manos la convocatoria y la conducción de la tal asamblea constituyente? O, para ser más explícitos, ¿cuál es el sector social que puede valerse de ella para imponerle a los demás de forma permanente las nuevas condiciones generales de la vida social?

En sentido estricto, ninguno. Tal vez sea cierto que el vicepresidente ascendido sea un historiador que quiere pasar a la historia presidiendo una asamblea constituyente deslumbrante. Pero no hay que darle tanta importancia a la influencia que su ego pueda tener. El campo neoliberal no va a aceptar un constituyente en el que los insurgentes alcancen siquiera la mitad de la representatividad que les correspondería, y los sectores insurgentes no van a aceptar que su representatividad se vea disminuida, así sólo sea mínimamente. Pero el vicegobierno –al igual que la mayoría de los diputados, quienes sin ningún pudor conservaron su curul– no quiere un constituyente sin el campo neoliberal, que lo dejaría sin financiamiento y sin apoyo para gobernar, y tampoco puede hacerlo sin los insurgentes, cuya ausencia haría que lo único deslumbrante fuera la farsa. Quiere estar donde se reúne “el pueblo” y busca halagarlo, pero en cuanto surge la exigencia de derogar la ley de hidrocarburos y no se le deja salirse por la tangente, confiesa: eso *es imposible de cumplir*.⁵ Por otra parte, mientras las cosas sigan como están, los insurgentes no pueden hacer por separado una asamblea constituyente de toda la nación de naciones, sino sólo, si acaso, de un nuevo movimiento reivindicativo y de oposición dentro de esa nación, además de que muy probablemente se escindirían en el intento.

⁵ Reseña del discurso de Mesa en el Encuentro Social Alternativo de Santa Cruz de la Sierra el 14 de noviembre de 2003 (Luis A. Gómez, *La Jornada*, 15 de noviembre de 2003).

¿Quién puede entonces estar interesado en dejar las cosas a *la inercia* de la resultante producida por las luchas sostenidas hasta el 17 de octubre, según la cual lo más probable es que la tal asamblea constituyente no se realice, que no se establezcan nuevas condiciones generales de la vida social, que el repliegue táctico no haya sido sino el comienzo de un enfriamiento de la insurrección y, por lo tanto, que la revolución que lleva en sus entrañas se posponga indefinidamente? En sentido estricto, a como están las cosas, quien tiene la sartén por el mango sigue siendo el campo neoliberal, cuyo interés es que se reafirme lo que siempre ha querido establecer: una situación en la que “no hay alternativa”.

Las inercias hay que asumirlas como punto de partida de la acción, pero no son las inercias las que definen el futuro. Hay un sector de los insurgentes que sigue urgido de un cambio radical y que durante los meses anteriores adquirió una gran cohesión y mayor conciencia sobre la potencia de su solidaridad activa –lo que también forma parte de la situación constituida–. Este sector no va a dejar que las cosas se queden como están, es él el que dice: “esto no ha terminado”. De él ha empezado a surgir una propuesta que muy bien puede resolver la disyuntiva ante la que se detuvo la revolución, tal vez porque sólo él vive en condiciones que la hacen posible. La reconstrucción del Qullasuyo puede parecer demasiado parcial a primera vista –aun sin la vista cansada–, pero analizándola con más detenimiento –y sin prejuicios– muestra las características de una verdadera alternativa general y de largo alcance. En ella no hay nada que impida concebirla como un momento en el camino hacia un constituyente nacional verdaderamente representativo de quienes hicieron la insurrección –al contrario, hay mucho en esta dirección– y, sobre todo, las fuerzas que conquistaron el triunfo del 17 de octubre de ninguna forma se descubrieron insuficientes para llevarla a cabo: casi podría decirse que ya la hicieron y que ya se les reconoció, aunque establecerla explícitamente como una condición general para el desarrollo futuro del país no es cosa menor.

El Qullasuyo y Bolivia; la wiphala y la tricolor

10. La clave parece estar en la dinámica mostrada por dos banderas, la tricolor nacional y la wiphala indígena de los siete colores. Son como los dos epicentros que marcaron la trayectoria del movimiento insurreccional. Durante los meses pasados fueron enarboladas conjuntamente por muchos, haciendo que sus expresiones más polarizadas tuvieran un movimiento convergente; a partir del 17 de octubre, en cambio, empezaron a ser objeto de fuerzas divergentes.

Simple y sencillamente, no es posible integrar de la misma forma las cuestiones indígena, popular,

democrática y nacional, todas legítimas y acuciantes, cuando la integración se intenta desde el polo indígena –y en efecto las ha integrado fuertemente, como veremos– que cuando se la busca desde el polo nacionalista –a la que le cuesta más trabajo integrar lo indígena. Podrán estar de acuerdo en oponerse a las condiciones que ponen el gran empresario y el latifundista –aunque el polo indígena será mucho más “excluyente”–, pero respecto a las que demandan los pequeños propietarios y los trabajadores del campo y de la ciudad lo que abundarán serán los desacuerdos. Cada una de esas posiciones –como hemos visto en el caso del Pachakutik y del MAS– tiene una jerarquía distinta de prioridades y estructurará de forma diferente sus alianzas. Lo que hace la una –aun convencida de que hace lo mejor para todos– deshace lo hecho por la otra, o lo amenaza. En otras palabras, se desarrolla una lucha entre ellas, al menos una lucha sorda –aunque ya es bastante ruidosa. Muy bien pueden tratar de resolver su diferendo con estricto apego a las normas democráticas, pero esto no resuelve nada, si acaso lo agrava, porque sus normas no son las mismas. No será la asamblea constituyente la que pueda garantizar que tengan que caminar juntas; muy bien puede precipitar su ruptura: ¿a quién va a tratar de aislar el vicegobierno, en quién tratará de apoyarse para lograrlo?; y si lo logra, ¿qué hará con un aliado que ya casi no le servirá de nada, más que de fachada –o de taparrabos?

Fuera, pues, de los ataques y amenazas de los que son presa por igual, provenientes del campo neoliberal, lo único que podría hacer converger esas dos banderas es “lo popular”. Pero, ¿qué hay en “lo popular” que no se defina hoy en términos de lo indígena o lo nacional? En 1952, los mineros fueron el centro de gravedad, la columna vertebral y la fuerza motriz que encarnó todas las energías populares –en el sentido del nacionalismo revolucionario que caracterizó aquella época–, pero hace casi veinte años que la mayor parte de lo que fue la fuerza minera se desperdigó por las comunidades, los campos de coca y los puestos ambulantes. Por lo sucedido estas semanas, no parece que ni los contingentes mineros que aún quedan, ni los fabriles, maestros, transportistas y petroleros, puedan constituir un polo distinto que resuelva las contradicciones entre los polos indígena y nacionalista.

Sólo que todo esto sólo esboza un marco general de tensiones al interior del campo popular. Apenas nos da una estructura, y aún muy formal, de sus posibilidades. Falta la historia.

11. La insurrección se dio un nombre propio: “la guerra del gas”, que enlazaba explícitamente con “la guerra del agua” de tres años atrás, en Cochabamba,⁶ y remitía a lo que de hecho fue la de la coca,⁷ la

⁶ Las movilizaciones empezaron en febrero de 2000 contra la Ley de Aguas dictada por el gobierno de Bánzer para privatizar los pozos, las fuentes y el agua potable a favor de trasnacionales como Bechtel. Durante la semana del 3 al 10 de abril, las calles y la plaza principal de Cochabamba, así como los caminos que conducen a la ciudad, fueron tomadas y bloqueadas con barricadas por la

del petróleo y minas,⁸ antes la del estaño, en 1952, y, más lejos, durante la colonia, la de la plata. ¿Un eslabón más en la larga cadena de agravios al nacionalismo? Desde luego. Sin embargo, la explosión provino del polo indígena, que formulaba el agravio en términos de la tierra como fuente última, y ya casi única, de su existencia comunitaria, la que a su vez, en medio del feroz desempleo, ha vuelto a ser para muchos la sola condición de su existencia individual. No es “la tierra” abstracta, vista desde la metrópoli como territorio sobre el cual ejercer la soberanía o como almacén de recursos a explotar; es la tierra en concreto, parte integrante del metabolismo que constituye la vida social, de forma similar a como la encontramos en la insurrección zapatista de 1994 o como late en la rebelión de Atenco de 2002, una noción más cercana al concepto de naturaleza en Marx o al de Tierra entre los buenos ecologistas. Puede ser que la plata, el estaño y el petróleo fuesen materiales demasiado ajenos a la vida de las comunidades –aunque desde luego no lo fue el trabajo de extraerlos–, pero con el agua y la coca, incluso el gas, el agravio es mucho más directo.

El caso es que fueron las comunidades y *las redes* aymaras las que declararon la guerra del gas y, al sostenerla aún con más decisión al ver caer a sus muertos, fueron ellas las que esta vez se convirtieron en el centro de gravedad, la columna vertebral y la fuerza motriz de la insurrección de septiembre y octubre de 2003. Nada ni nadie puede disputarle a la whiphala, al recuerdo de Tupaj Katari y Bartolina Sisa, con su cerco a La Paz, y al proyecto de reconstruir el Qullasuyu el derecho a ser enarbolados muy en alto y en la primera línea de la insurrección. Ganaron ese derecho en el Altiplano y, en especial, en El Alto, a unos minutos de La Paz, centro político del país, aunque muy distantes de Santa Cruz, la nueva fortaleza económica.

El problema es por qué ahora la reivindicación de la whiphala y del Qullasuyo, tan decisiva para detener el saqueo del gas y derrocar al gobierno entreguista y autoritario hasta el asesinato, puede ser vista por algunos como contradictoria con la asamblea constituyente o como un peligro para afianzar lo alcanzado y avanzar hacia nuevas conquistas. ¿Es por un oportunismo que quiere arrebatarle a los aymaras el fruto de su victoria, encubierto bajo la oferta de sacarle las castañas del fuego a su “desesperación”? ¿O proviene de una parte de las fuerzas insurgentes que se ve amenazada por un fundamentalismo indígena excluyente y aventurero, que no reconoce sus límites y la necesidad de

población, realizándose numerosas marchas, cabildos y asambleas comunales y barriales. El gobierno dictó estado de sitio, las movilizaciones respondieron pidiendo su renuncia. Finalmente, el contrato con Bechtel fue roto (*Tinku*, Cochabamba, 2003, p. 14).

⁷ En septiembre de 2000, “los campesinos realizan los bloqueos más grandes, por el tiempo de un mes, siendo la zona de Achacachi y el Chapare el epicentro de las movilizaciones con cortes de rutas” (*Tinku*, Cochabamba, 2003, p. 14)

⁸ En agosto de 1985, el “Decreto Supremo 21060” da el primer paso hacia la privatización de los hidrocarburos y la minería (*Tinku*, Cochabamba, 2003, p. 14).

alianzas amplias, con sus correspondientes concesiones, frente al enorme poderío que aún conserva el campo neoliberal?

12. Volvamos a la guerra del gas. Los yacimientos, para empezar, no están en territorio aymara, y para acabar pronto, lo que los aymaras han reclamado es que su industrialización beneficie al *pueblo trabajador boliviano*. Es por este pueblo por el que pusieron sus muertos. Otro tanto puede decirse del petróleo, de la coca y del agua.

Pero además, como en toda insurrección, una cosa es el detonante y otra “la causa”, en la que se sintetizan múltiples factores. No sólo estaban las cuestiones de los hidrocarburos, la coca y el agua. Desde los primeros días de agosto, en las 20 provincias del departamento de La Paz se realizaron asambleas para discutir un plan de acción frente a “la venta del gas y otras leyes”, como la Ley de Seguridad Ciudadana, y levantar reivindicaciones campesinas, como la dotación de tractores. El 8 de agosto, las discusiones se concentraron en un resolutivo que se mantuvo en secreto hasta el día 17, cuando se realizó lo que la prensa calificó de “sorpresivo bloqueo de caminos” en la ruta La Paz-Copacabana, a 156 km de la capital. Empezaba la impresionante marcha que dos meses después culminaría con el cerco y la toma de La Paz.⁹

Para el movimiento aymara, además, no se trataba sólo de reivindicaciones nacionalistas y democráticas en general y demandas campesinas en particular. A finales de agosto, el ministro de Trabajo había anunciado que recomendaría suavizar la contrarreforma laboral (iniciada con el mismo “Decreto Supremo 21060” que preparaba la privatización) retirando su artículo número 55, referido a la flexibilidad en la contratación de los trabajadores “para asegurar la estabilidad laboral y que la economía no corra riesgo”. Al día siguiente, el *mallku* Felipe Quispe respondió declarando que el mentado “Decreto Supremo” permitió “echar a las calles a miles de trabajadores” y “sólo se anulará a través de una revuelta popular”, e hizo un llamado *al pueblo de Bolivia* para luchar por la anulación “no sólo” de ese Decreto, sino también “de otras normativas que atentan contra los derechos de los trabajadores, campesinos y pueblo en general”, como la Ley INRA y la de la coca.¹⁰

Con su insurrección, pues, los aymaras se mostraron como una “nación originaria” que se asume como parte de una sola nación constituida por diversas naciones originarias y por mestizajes de toda índole; y que lucha radicalmente por imprimirle *a toda esta nación de nacionalidades* un rumbo

⁹ *Bolpress*, 18 de agosto de 2003.

¹⁰ *Bolpress*, 29 de agosto de 2003.

favorable a sus sectores trabajadores, sean aymaras, quechuas o guaraníes, mestizos o criollos. Su fuerza social y política, desplegada con gran energía por caminos y calles e integrando en un solo movimiento las cuestiones indígena, popular, nacional y democrática, hizo que la whiphala emergiera con gran fuerza y que la bandera tricolor saliera de su postración, aproximándose entre sí.

No se puede pensar que ahora, después de su triunfo insurreccional, los aymaras van a retroceder y a encerrarse en sí mismos, a separarse del pueblo junto al cual lucharon y a renegar de las reivindicaciones por las que dieron tantas vidas.

13. No se nos puede objetar que esta relación entre los aymaras y el pueblo trabajador boliviano haya sido meramente el producto circunstancial de una convergencia pragmática, un artificio tipo campaña electoral. Los aymaras son, además de los miembros de las comunidades que de algún modo se pueden llamar originarias, también las extensas redes de cocaleros, campesinos, mineros, fabriles, ambulantes, maestros y estudiantes de origen aymara, quienes trabajan y conviven como compañeros de los quechuas, guaraníes, mestizos y criollos, con los cuales vienen llevando a cabo mestizajes culturales y de parentesco desde hace tiempo. Y los aymaras de las mismas comunidades ya son, en buena medida, aymaras que han regresado, o que regresan periódicamente, después de haber pasado por esos mestizajes. No es un accidente de la historia que su principal organización sea la Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

No es posible, pues, imaginar que el aymara de hoy –de raíces ancestrales, sí, pero también producto de 500 años de luchas populares, incluidas la revolución del 52, tantas luchas antineoliberales y esta misma insurrección– ahora quiera cercenarse mediante una depuración étnica. La oposición entre la asamblea constituyente y la reconstrucción del Qullasuyu, si es que vale concebirla en estos términos, puede estar alimentada por prejuicios racistas de uno y otro lado, pero no hay razón para pensar que es una oposición étnica. ¿No se tratará, más bien, de una oposición política –en el sentido de relaciones de poder entre distintos sectores sociales, definidos en términos de clase– que, por algo, adopta una forma étnica?

14. ¿Quiénes son, pues, esos aymaras que enarbolan la whiphala y reivindican el Qullasuyu, sí, pero también otras condiciones generales para el uso de la fuerza de trabajo en toda Bolivia en lo que se refiere a qué se hará con el gas, el petróleo, la coca y el agua, y también en lo que se refiere a las condiciones de empleo en las fábricas y en los campos, así como otras leyes sobre la seguridad

ciudadana y sobre muchos otros temas “nacionales”? Estos aymaras que hicieron la insurrección y están tratando de hacer triunfar su revolución son gente que en su mayoría ha quedado reducida a vivir del uso comunitario de su fuerza de trabajo en las condiciones más elementales, miserables incluso; no obstante, o tal vez por lo mismo, se plantean tomar en sus manos las condiciones generales sobre el uso de la fuerza de trabajo en toda Bolivia.

¿A quién pueden estar amenazando estos trabajadores aymaras que, al mismo tiempo que “confiesan” su propósito de imprimirle un nuevo rumbo al país y de participar masiva y organizadamente en las decisiones que afectan la vida de todos los bolivianos, reivindican un territorio sobre el cual gobernarse con autonomía? Y no son unos cuantos, ni están en un rincón lejano del país, tampoco están dispersos. La insurrección ya les dio una medida de su potencia.

En pocas palabras, el Qullasuyo puede ser otro poder constituido dentro de Bolivia, una especie de gran zona liberada que, por el solo hecho de constituirse, transformaría completamente la constitución real del país y alteraría drásticamente de forma duradera toda la correlación de fuerzas dentro de él, en el mismo sentido en que todo esto se experimentó durante los días de la insurrección de octubre. Y al menos a corto plazo, sería un poder de los trabajadores, aunque por las propias condiciones de partida de ese poder y de ese trabajo, que sólo cuentan con sus manos y sus tierras, resulte irreconocible más allá de lo elemental –son “los plebeyos”, el “pueblo”– y resulte incierto cómo evolucionará al interrelacionarse con todas las demás fuerzas, nacionales e internacionales. Su internacionalismo empieza a ponerse a prueba dentro de la misma Bolivia.

Por lo pronto, es una iniciativa que modifica todo el tablero de las posibilidades y abre un camino para hacer triunfar la revolución que la insurrección de octubre lleva en sus entrañas. ¿Querrán ahogarla provocando una guerra civil? Porque una cosa es segura: los aymaras no renunciarán a hacer valer el derecho a su autodeterminación que se ganaron a pulso en las recientes jornadas, aunque a los señores del dinero les moleste tanto que estos aymaras sean revolucionarios, que se propongan decidir sobre las condiciones generales del uso de la fuerza de trabajo, sobre el qué se produce, para satisfacer las necesidades de quiénes y a costa de la de quiénes otros; es decir, arrancarle al gran capital y tomar en sus propias manos “las riendas de su destino”.